

UPN dice ahora que se debe cumplir la ley sanitaria que apruebe la oposición

LOS GRUPOS PIDEN A VERA PARAR EL DECRETO HASTA DEBATIR LA LEY PARA NO PERJUDICAR A LA PLANTILLA

La oposición avisa al Gobierno de que puede ser denunciado por prevaricar si no acata el texto, que se aprobará el 8 de febrero

M. GONZÁLEZ

PAMPLONA. La oposición, salvo el PP, reclamó ayer paralizar el decreto foral de reforma de la Atención Primaria hasta que se debata la propuesta de ley acordada para tumbiar el texto legal. UPN afirmó que si se aprueba, la ley "deberá ser cumplida", tras no confirmar el pasado sábado la consejera de Salud, Marta Vera, que la acatará. La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra admitió ayer a trámite la proposición de ley, presentada por PSN, NaBai, Bildu, I-E y Geroa Bai, que se debatirá por el procedimiento de urgencia y en lectura única previsiblemente en el pleno del 8 de febrero. La aprobación supondría la derogación del decreto foral que regula el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria, de los puntos de atención continuada y urgente, y las

modalidades de atención continuada y urgente. Salud había anunciado para el mes que viene la puesta en marcha de los cambios, tras finalizar la nueva adscripción de personal, de ahí que la oposición haya intentado acelerar al máximo los plazos y evitar así que Salud ponga en marcha medidas que serán revertidas al aprobarse la nueva ley. El texto contempla la remisión al Parlamento foral de un nuevo plan, con participación de los profesionales, entidades locales y colectivos sociales.

El regionalista Carlos García Adanero confirmó que el Gobierno "seguirá adelante" con el decreto, pero afirmó que si se aprueba la proposición de ley de los grupos "habrá que cumplir la ley". "Si la ley deja abierta alguna interpretación, el departamento sabrá", dijo, no obstante, para insistir en que "lo que va a hacer el Gobierno es cumplir la ley



Protesta del personal de urgencias rurales ante el edificio de Osasunbidea en Conde Oliveto. FOTO: P. CASCANTE

seguro, como hace con todas las leyes". Además, lamentó que los grupos se unan para "tirar todo por tierra" y criticó que "no han dado ninguna alternativa ni han dicho qué se quiere mejorar". "Todo negativo, nada positivo", aseveró.

El socialista Roberto Jiménez pidió que se retire el decreto y manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Navarra "diga que se va a seguir con el decreto independientemente de lo que diga el Parlamento". "Sería la tercera ley que este Gobierno se pasa por alto", recordó. El líder de los socialistas navarros defendió que si la ley se aprueba el decreto queda anulado "y si intentaran

implantar el decreto -advirtió- estaríamos hablando de prevaricación".

Por NaBai, Asun Fernández de Garaialde reclamó parar el decreto y todo lo que pueda afectar al traslado de personal. "Lo contrario sería una auténtica locura y llevaría al caos porque dejaría a muchos trabajadores en una total inestabilidad". La parlamentaria replicó a UPN que las propuestas de la oposición "son constructivas, pero des-

de un modelo sanitario diferente".

Maiorga Ramirez, de Bildu, defendió la tramitación rápida de la proposición de ley para "impedir que la voluntad del Gobierno de Navarra de actuar al margen del Parlamento pueda sustanciarse". Y calificó como "muy grave" que una consejera del Gobierno foral "diga que va a ignorar las decisiones del Parlamento". "Podríamos estar una prevaricación política", apuntó.

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, pidió a Vera que "no sea temeraria" y "no monte ningún lío" con la aplicación del decreto, un decreto que a su juicio "daña el derecho a la atención especialmente en zonas rurales".

"Si la ley deja abierta alguna interpretación, el departamento sabrá", afirma García Adanero

MARISA DE SIMÓN

PORTAVOZ DE IZQUIERDA-EZKERRA EN LA COMISIÓN DE SALUD

"Vera gestiona Osasunbidea como una empresa privada"

La parlamentaria de I-E tilda de "nefasta" la gestión de Vera, una labor que ve tan perjudicial para la sanidad pública que le lleva a urgir su renuncia. Incluso va más allá y sostiene que la proposición que ha unido a toda la oposición abre una vía para un cambio de Gobierno en Navarra

M. GONZÁLEZ

PAMPLONA. ¿Cómo se gestó el acuerdo para presentar la primera proposición de ley conjunta de esta legislatura?

La semilla prendió en el último pleno del año pasado. La idea se le ocurrió al portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, y la comenté con Bakartxo Ruiz, de Bildu. Dedicé la Navidad a trabajar la iniciativa y, cuando estuvo lista, hablé con el resto de grupos y acordamos presentar la proposición al día siguiente de publicarse el decreto en el BON. ¿El PSN puso alguna pega?

Ninguna. Hubo una total disposición.

¿Por qué consideran necesaria una propuesta tan contundente? Porque lo sucedido es gravísimo. El decreto foral iba a perjudicar muchísimo la atención continuada y las urgencias, especialmente en las

zonas rurales, y no solucionaba los problemas. Defendemos priorizar las urgencias en zonas rurales porque están concentradas en las urbanas. Además, el decreto confunde la atención continuada, que es previsible, con la urgente, que no lo es. También comprobamos que va a suponer un dinero extra porque se diseñó sobre una ampliación de la jornada laboral que no se va a dar. Vimos que había que pararlo y establecer mejoras, pero con participación. Incluso se puede organizar una ampliación de horarios sin elevar el coste.

Vera ha atacado a los profesionales con ejemplos de sueldos de 140.000 euros como si fueran la norma...

Es injusta. Los funcionarios no están bien pagados y si hay alguien que cobra esas cantidades, que hubieran atacado el problema antes. UPN lleva muchos años en el Gobierno y es responsable de los desajustes, además, esos casos concretos no justifican esa reforma del sistema.

Incluso aceptando que la finalidad sea mejorar la atención como sostiene Salud y no privatizar como denuncia la oposición, se puede implantar una reforma de este calado sin consenso?

No. Esto no es solo una cuestión política sino también técnica. Todos los profesionales, sindicatos y colectivos sanitarios la rechazan. Es una temeridad que siga adelante habiendo este rechazo. En la relación de exper-



Marisa de Simón, durante un pleno parlamentario. FOTO: J. BERGASA

tos que Vera dijo haber consultado, no había ni un solo profesional de Urgencias. No ha admitido sugerencias, ni siquiera en lo relativo al cambio en la guardia presencial.

¿Se ha precipitado la consejera?

Sí. La revisión del modelo estaba prevista para 2013, pero ha arremetido contra todo el mundo sin esperar.

¿Qué consecuencias tendría que Vera no acatase la ley?

Eso es impensable. Debe acatarla. Es una cuestión de democracia y sistema de derecho. Se trataría de prevaricación y utilizaríamos todos los

mecanismos, incluso denunciar por la vía penal, para evitarlo.

UPN habla de resquicios en la ley...

No vemos ninguno. Si UPN insiste, no se de qué manera, en aplicar el decreto, en intentar de alguna manera incumplir la ley, sería una temeridad e irresponsabilidad que dejaría a UPN en una situación muy complicada.

¿Cómo calificaría la gestión de Marta Vera al frente de Salud?

Nefasta. Debería dimitir. La centralización de las compras tiene sentido, pero no el resto de medidas: exter-

nalización de las cocinas, unificación de los laboratorios con un montón de despidos, lo sucedido con el transporte sanitario, esta reforma... No ha dejado títere con cabeza. Gestiona el sistema sanitario como si fuera una empresa privada y no lo es. No es lo mismo fabricar coches que organizar la salud de la ciudadanía, que no solo es curar sino también dar atención. No se puede gestionar con criterios economicistas. Ella solo utiliza criterios de ahorro y no hay quien la saque de ahí.

¿Abre una vía política esta propuesta conjunta de la oposición que puede ampliarse?

Sí. No se trata de abusar de los proyectos de ley, pero a ello nos lleva la coyuntura política. El de UPN es un Gobierno en minoría que regula en contra de la mayoría. Está debe encontrar un mecanismo para echar atrás, para parar todo aquello que pueda ser perjudicial para la ciudadanía. Esta acción conjunta abre una vía muy importante en este sentido.

¿La ciudadanía navarra es consciente de esta crisis institucional?

La ciudadanía no es tonta. Ve la crisis con claridad, pero puede que no vea con tanta claridad que hay otras posibilidades y soluciones que pasan por escuchar para conectar con la gente para cambiar y restablecer la confianza institucional y política. Hay posibilidades de hacer una política centrada en las personas.